



judicial. Por otra parte, los ordenamientos procesales en nuestro país han atenuado los efectos de la perención de instancia, a través de la denominada purga o convalidación de la caducidad cumplida, la que se opera cuando el peticionario de aquélla ha consentido cualquier actuación del tribunal o de la parte posterior al vencimiento del plazo legal pertinente (art. 315, párr. 1º, CPCCN). Por lo tanto, notificada al interesado cualquier providencia extemporánea sin que se haga valer la caducidad dentro del correspondiente plazo de impugnación, aquélla queda purgada (Lino Enrique PALACIO. ?Derecho Procesal Civil?, Ed. Abeledo Perrot, 2017 - 4ta. Edición, pág. 1481). Cuadra entonces preguntar si, por un lado, la última actuación desplegada a pedido del actor resultó apta, en el caso, para impulsar el procedimiento y si, en caso afirmativo, dicha actuación fue consentida oportunamente por el demandado. Para responder a dichos interrogantes, cabe remitirse a las constancias de autos. Así, el último acto impulsorio del proceso luego de que se procediera a librar mandamiento de intimación de pago con fecha 10/06/2014 (fs. 7), es la presentación efectuada por la parte actora con fecha 31/07/2015 (fs. 8), requiriendo librar nuevo mandamiento. De lo expuesto se verifica que entre una y otra actuación ha transcurrido casi un año, por lo que esta última fue realizada con posterioridad al vencimiento del plazo de caducidad que prevé el art. 310 inc. 2º del CPCCN. Sentado ello, resta dilucidar si la parte demandada prestó consentimiento del proveído dictado con fecha 27 de agosto de 2015 y por consiguiente, convalidó la perención ocurrida. Sobre el particular, entiendo que el agravio planteado por el recurrente no puede prosperar, ya que la parte demandada fue notificada del mandamiento de intimación de pago con fecha 30/10/2015 (fs. 10), y con fecha 04/11/2015 compareció e hizo valer el planteo de caducidad de la instancia dentro del correspondiente plazo legal de impugnación y en la primera oportunidad procesal que tuvo al respecto (fs. 14/16vta.). De esta manera, y tal la cita que formula el calificado doctrinario aludido anteriormente, no puede asignársele efecto convalidatorio de la perención ocurrida, porque no "...existía a su respecto toma de conocimiento de dicha actuación al tiempo de peticionar (el demandado) la caducidad en vista, por lo que mal puede interpretarse que medió consentimiento de un acto procesal cuya existencia resultaba desconocida...?" (Lino Enrique PALACIO. Obra citada, pág. 1463). V.- Por las razones dadas, encontrándose verificados los requisitos objetivos para que opere la perención oportunamente solicitada, esto es, la existencia de una instancia en curso y la falta de actos de impulso del proceso válidos durante el plazo de tres meses que prevé la ley ritual (art. 310 inc.2º), y la inexistencia de los presupuestos que eximen su procedencia, es que propugno la confirmación de la resolución recurrida en tanto hace lugar al planteo de caducidad deducido por la demandada, con el consecuente rechazo del recurso de apelación incoado por la representante jurídica de la parte actora.- VI.- Las costas se imponen a la actora perdidosa conforme el principio objetivo de la derrota (art. 68, 1º parte del CPCN), difiriéndose las regulaciones de honorarios que correspondan para su oportunidad. ASÍ VOTO. La señora Jueza de Cámara, doctora LILIANA NAVARRO, dijo: Que por análogas razones a las expresadas por el señor Juez preopinante, doctor ABEL G. SANCHEZ TORRES, vota en idéntico sentido. La presente resolución se emite por los señores jueces que la suscriben de conformidad a lo dispuesto por el art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional y 4º del Reglamento Interno de este Tribunal, encontrándose en uso de licencia el Dr. Luis Roberto Rueda. Por el resultado del Acuerdo que antecede; SE RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación deducido por la representación jurídica de la parte actora, y confirmar la Resolución dictada con fecha 24 de junio de 2016 por el señor Juez Federal N° 2 de esta Ciudad, en todo lo que decide y ha sido motivo de agravios. 2) Imponer las costas a la actora perdidosa conforme el principio objetivo de la derrota (art. 68, 1º parte del CPCN), difiriéndose las regulaciones de honorarios que correspondan para su oportunidad. 3) Protocolícese y hágase saber. Cumplido, publíquese y bajen.- ABEL G. SANCHEZ TORRES LILIANA NAVARRO MIGUEL H. VILLANUEVA SECRETARIO DE CÁMARA 024079E